
ESTADO Y POLITIZACIÓN EN LA SOCIEDAD COLOMBIANA. EL PROCESO DE PAZ DEL PERÍODO BETANCUR (1982-1986)

Alberto G. Flórez Malagón¹

El inicio de la década de los ochenta en Colombia se caracterizó por un importante proceso político en el cual se replantearon de manera importante las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, a partir del manejo de la crisis generada por el agotamiento del Frente Nacional, por los cambios en la economía mundial y por la agudización del conflicto guerrillero en el país, entre otros factores.

El período del gobierno de Belisario Betancur inició de manera definitiva este cambio, determinante para el posterior desarrollo del sistema político colombiano. En este trabajo se presenta un análisis de un aspecto, quizás el más importante, de dicho período, el así llamado "proceso de paz", cuyo estudio esperamos permita a los analistas de la coyuntura actual auscultar las raíces del proceso histórico vivido en la escena política colombiana de los últimos años.

Se utilizarán algunos elementos teóricos propuestos por Antonio Gramsci, discutidos en la primera sección del trabajo, para luego estudiar el proceso de la coyuntura política en Colombia en los años ochenta, caracterizando los intentos de apertura democrática de esos años, desde la perspectiva de una mayor politización de la sociedad colombiana, consecuencia a su vez de la crisis orgánica que se venía desarrollando en el país. Se hará especial énfasis en la viabilidad del proceso desde el punto de vista de la correlación de fuerzas



El Tiempo, septiembre 9 de 1983, p. 1A.

1 Profesor-Investigador. Departamento de Historia y Geografía, Facultad de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Javeriana.

en la sociedad colombiana de la época, para determinar si los intereses de los grupos tradicionalmente dominantes tuvieron posibilidad de imponerse o si, por el contrario el proceso evolucionó hacia una crisis por fuera del control del Estado institucional.

LA EXPANSIÓN DEL ESTADO COMO MARCO DE REFERENCIA

En el caso del análisis político y el de los estudios sociales en general, no es posible, por lo menos por ahora, referirse a un paradigma único y ni siquiera a uno que esté lo suficientemente elaborado como para realizar un estudio exhaustivo de la realidad. Un caso evidente es el de la teoría marxista, que si bien ha logrado desarrollar una serie articulada de pautas para el análisis científico, sigue considerándose como una "teoría abierta"². Marx no logró nunca ocuparse sistemáticamente del problema del Estado, o bien el Estado del que se ocupó, en algunos apartes de su obra, era el del capitalismo competitivo y no el del capitalismo tardío, y sus seguidores, hasta la fecha, no han logrado elaborar una teoría única acerca de las relaciones entre el Estado y la sociedad. A pesar de estas obvias limitaciones, existen importantes aportes al desarrollo de una teoría del Estado y de la Sociedad Civil dentro de la producción "neo-marxista", aportes que resultan muy útiles para el historiador. Uno de los más conocidos dentro de estos teóricos neomarxistas fue Antonio Gramsci, quien introdujo profundas innovaciones, especialmente en relación a la discusión sobre el papel de la política y, para el caso que trataremos aquí, acerca de la difusión de la "superestructura", especialmente de la política, en los estratos elementales de la sociedad civil³.

Existiría, según Gramsci, una función material institucional, de la ideología que se desarrolla paralelamente a la expansión de la política en la sociedad. En otras palabras, lo que se transformaría en el núcleo de análisis para el proceso de construcción del Estado es la dilatación de los límites del mismo, cuando el Estado se introduce en las formas de organización y conciencia de las masas ocupando momentos y sectores de la vida civil que dentro de este cuadro transforman su propia relación con la política.

La expansión de los límites del Estado implica un desplazamiento en los niveles de su base social que ocurre de época en época, cuando se viola la separación entre el Estado institucional y la economía. Según Gramsci, la dilatación de los límites del Estado, esto es, la politización creciente de una sociedad, puede ser el resultado, de lo que se llamaría una "crisis orgánica"⁴.

Esta crisis se caracteriza principalmente por la pérdida de hegemonía de un grupo social determinado. Hegemonía que se discute en términos de liderazgo intelectual y moral de las clases populares por parte de las clases dominantes o del bloque de poder. En este contexto, un bloque de poder es una alianza bastante estable de las clases o fracciones de clase dominante, cuya unidad depende de un módico sacrificio mutuo de intereses inmediatos. Cuando se presenta la crisis, estos sacrificios incluyen la penetración de otros grupos en la esfera del control estatal, de manera que se genera una mayor difusión de la política o lo que es lo mismo, una difusión del Estado institucional en la sociedad. La mayor politización implica regulación de las relaciones políticas y consecuentemente mayor institucionalización.

En la historia colombiana, no se puede hablar de un bloque de poder estable⁵, sin

2 Bobbio, Norberto. "Teoría del Estado o Teoría del Partido", en Althusser, Louis, et. al., *Discutir el Estado. Posiciones frente a una tesis de Louis Althusser*, México, Folio Ediciones, 1982, pág. 79.

3 De Giovanni, Biagio. "Crisis Orgánica y Estado en Gramsci", en Badaloni, Nicola, et.al, *Teoría Marxista de la Política*, México, Cuadernos de Pasado y Presente, No. 89, 1981, pág.142.

4 De Giovanni, Biagio, "Crisis..." pág. 150.



El Tiempo, septiembre 9 de 1983, p 2D.

embargo los elementos que hasta aquí se han referido son muy útiles cuando se analiza un proceso como el vivido en Colombia en los años ochenta a partir del intento de institucionalización de lo que entonces claramente expresaba una forma de actividad política: la guerrilla política de los años ochenta.

El trabajo se dividirá en dos partes. En la primera, se hará una caracterización general del proceso de paz del período Betancur y la posición de algunos de sus principales actores; en la segunda, se realizará una mirada rápida a la posición de la llamada “izquierda colombiana” frente a esa coyuntura, como una manera de analizar el papel de terceras fuerzas de la sociedad civil, intermedias, en este caso, entre el Estado y los grupos guerrilleros, en la evolución y adaptación del proyecto político de cooptación institucional.

ASPECTOS DE LA CRISIS ORGÁNICA EN COLOMBIA EN LOS OCHENTA

Aspectos políticos

El sistema bipartidista en Colombia ha imperado desde que este país se originó como República independiente en la primera mitad del Siglo XIX. A partir de entonces el papel más importante de los partidos políticos fue el de canalizar la mayor parte de los conflictos sociales en el país, creando a la vez una ideología de pertenencia bipartidista en la casi totalidad de los sectores ciudadanos. Este último aspecto, según Francisco Leal⁶, se realizó especialmente a través de los procesos de las Guerras Civiles durante la segunda mitad del Siglo XIX, y posteriormente desde el esquema de los gobiernos de partido y su más dramática consecuencia que fue la “Violencia” bipartidista, hasta el inicio del Frente Nacional (1958-1974)⁷.

5 - Leal, Francisco. *Estado y Política en Colombia*. Bogotá, Siglo Veintiuno Editores, 1984, pp.119, 92,, 136, 193.

6 cfr, Leal, Francisco, *Estado y Política...*,pág. 109.

7 Véase también, Fernando Guillén Martínez, *El Poder Político en Colombia*. Editorial Punta de Lanza, Bogotá, 1979.

Este Frente, se constituyó como una alianza bipartidista, exclusiva y excluyente, para la alternación de la Presidencia entre los grupos políticos tradicionales, y cumplió la misión de conciliar el enfrentamiento violento de tipo coyuntural, pero no alteró las llamadas "causas objetivas de la violencia estructural"⁸. Además, se generaron hondas transformaciones en el proceso político colombiano alterándose el papel de los partidos, modificándose las formas e instrumentos de movilización política e imprimiéndose un nuevo sentido y contenido al discurso partidista.

Una de las consecuencias más importantes del Frente Nacional que condujo en parte a la crisis política de los años ochenta, fue la "despolitización bipartidista"⁹, esto es, la pérdida de la identidad partidista en grandes sectores de la población colombiana y el consecuente debilitamiento de la función de representación de los partidos tradicionales.

Como consecuencia de este último aspecto, se evidenció durante el período que siguió al Frente Nacional, un aumento de la abstención electoral, la aparición de nuevas formas de representación al interior de los partidos tradicionales (Alzatismo, MRL, por ejemplo) y al margen de los mismos (Grupos de Presión, Movimientos Cívicos y Estudiantiles, etc.), pero sobre todo, el auge de la actividad guerrillera, reforzada esta última por el empeoramiento de las condiciones de vida que obedeció a la ausencia de una reforma estructural exitosa durante el Frente Nacional. Este ambiente siguió presente en los gobiernos posteriores tanto institucional como ideológicamente. Es importante anotar además, que a pesar de la crisis política, la legitimidad del régimen se mantuvo sustentada en las prácticas clientelistas y en la creciente intervención del Estado en la economía¹⁰.

Las condiciones favorables para el surgimiento de terceros partidos continuaban vigentes en los años ochenta, pero la izquierda nacida del Frente Nacional no parece haber llenado este vacío, ya sea por su rigidez ideológica, por su cercanía a los grupos de oposición armada o a los grupos bipartidistas, o simplemente por su incapacidad de cooptar a muchos sectores populares. Se hubiera esperado que disidencias del bipartidismo se unieran en nuevas formas políticas incluida la izquierda democrática, como sucedió en otras épocas, las cuales quebrarían el papel primordial del clientelismo como elemento articulador de las fuerzas políticas nacionales, pero esto tampoco fue tan evidente dada su efímera y poco autónoma existencia. Por otro lado, la violencia permanente y la tremenda disparidad en cuanto a la riqueza e ingreso que la seguía alimentando, empezó a colocar a los militares como una potencial alternativa de poder que hasta el presente se ha resuelto solamente a través de situaciones transitorias (el caso Rojas o la ocasional beligerancia de algún oficial como Ruiz Novoa), del fenómeno paramilitar y más comúnmente a través de la profundización de las acciones militares regulares frente a la proliferación de grupos armados guerrilleros.

Ante todas estas posibilidades y amenazas, el proceso de Apertura Democrática del período Betancur apareció como proyecto importante que pretendía la concreción de una vía de solución a la crisis, pero que por el contrario ahondó las dificultades del proceso político colombiano.

Aspectos económicos

En la década de los ochenta, el sistema económico mundial entró en una crisis general originada en una combinación de elemen-

8 El término fue utilizado, entre otros, por Eduardo Umaña Luna en el Seminario sobre la Violencia en Colombia, realizado en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, en el mes de Junio de 1984.

9 Leal, Francisco, *Estado y Política...*, pág. 166.

10 Leal, Francisco, *Estado y Política...*, pág. 222. Ver además, Andrés Dávila y Francisco Leal, *Clientelismo*, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1991.

tos estructurales que condujeron a una recesión en el plano internacional. Esto se manifestó en Latinoamérica en la elevación de las tasas de interés, la suspensión de los flujos de créditos externos y la caída de los precios de los productos básicos lo que generó altos niveles de endeudamiento y contracción de las importaciones además de la caída del producto más acentuada de los últimos cincuenta años¹¹.

Para el caso colombiano, esta crisis se vio agravada porque las políticas de concentración de la renta en favor de los grupos financieros-industriales durante el período 1969-1983 tuvieron efectos contraproducentes. Estos sectores se vieron afectados por la recesión internacional, sobre todo a partir de 1975, lo que produjo en esta época un estancamiento de las exportaciones de manera que el consumo final se fue apagando al igual que el saldo de exportaciones, y las empresas se encontraron hacia 1981-82

con un exceso de capacidad sin utilizar. Esto generó un altísimo nivel de desempleo y la penetración legal y de contrabando de productos importados, lo mismo que políticas restrictivas del crédito y el consiguiente disparo de las tasas de interés. La industria claramente entró en recesión, agravándose el problema por la revaluación del peso y por las devaluaciones de las monedas venezolanas y ecuatorianas, que terminaron de sacar de sus mercados a los productos colombianos. La revaluación produjo, además, problemas a la agricultura en momentos en que los mercados internacionales practicaban el proteccionismo a todo nivel. Por último, y para completar el panorama de la crisis, se evidenció una fuga de capitales nacionales hacia el extranjero¹².

Aunque la actividad económica mundial mostró claros síntomas de recuperación hacia la mitad de la década de los ochenta¹³, el efecto de dicha recuperación no fue evi-


DESAGRAVIO

A LA PAZ Y LA DEMOCRACIA

NOS IMPIDIERON IR A
LOS ROBLES...
REUNAMONOS EN
BOGOTA

Plaza de Bolívar

Marzo 15 5 P.M.



M-19

11 Kalmanovitz, Salomón. "Las posibilidades de la Política Económica en la Coyuntura Recesiva", en *La Política Económica y Social del Gobierno de Belisario Betancur*. Cali, Corporación Editorial Universitaria, 1983, pág.47-67.

12 El Espectador, Octubre 21 de 1984, pág. 2B.

13 El Espectador,...., pág. 2B.

dente en el caso colombiano ni contribuyó a resolver los serios problemas estructurales que se habían generado por décadas.

Ante esta situación es importante mencionar el papel de los organismos internacionales que financiaron la deuda externa pública y privada del país. En el caso del Fondo Monetario Internacional, llama la atención el papel impositivo de las recomendaciones que éste sugirió para el manejo de la crisis y para la reactivación de la economía colombiana. Sus recomendaciones se presentaron casi como requisitos para adelantar los acuerdos sobre crédito externo. Bajar los salarios reales, reducir el crédito oficial al sector privado, disminuir el crédito externo y los subsidios sociales, desmontar las restricciones al contrabando y al derroche de divisas, recortar gasto público, aumentar impuestos y tarifas de servicios públicos y acelerar la devaluación, fueron algunas de las mencionadas recomendaciones que contribuyeron a complicar aún más las opciones de manejo de la política económica¹⁴. La adopción de la mayor parte de estas recomendaciones generó una serie de protestas populares que fortalecieron el clima de crisis.

La continuidad y profundización de la depresión económica fue un factor definitivo en la incapacidad del Gobierno Betancur para construir una alternativa viable de proyecto político capaz de enfrentar la crisis del régimen. Aunque su política económica fue valerosa para tratar de restarle fuerza a la voracidad del sector financiero de la economía y estimular la producción industrial, la insolvencia teórica de la época y el reformismo bloqueado, además de la dependencia de los organismos crediticios internacionales, minimizó los planes y presentó las decisiones económicas como una colcha de retazos. Esta situación desvertebró aún más las distintas fuerzas sociales e impidió que el poder

político presidencial trascendiera más allá del prestigio personal de Betancur¹⁵.

Vemos entonces cómo se enfrentaba en la época una doble crisis de los sistemas político y económico, que sin la presencia de una clase hegemónica, en el sentido gramsciano, reforzó el carácter de crisis orgánica que afectó al país y que, como ya hemos visto, se agravó especialmente a partir del Frente Nacional.

Fue en este contexto cuando se consolidó de manera crítica el movimiento guerrillero en Colombia, que argumentaba adicionalmente todo tipo de reivindicaciones de clase y una gran variedad de justificaciones ideológicas que cubrían un amplio espectro, desde el populismo hasta las más radicales posiciones marxistas¹⁶. Y es entonces cuando se produjo la actuación del gobierno en favor de un proceso de acercamiento y diálogo con dicho movimiento, acercamiento que puede interpretarse como un mecanismo de control social, y como una respuesta ante la creciente necesidad de politización de la sociedad, especialmente evidente a partir de la vivencia de la crisis a la que nos hemos referido.

Se hará a continuación una evaluación de este proceso y las dificultades que tuvo para su consolidación como una manera de proyectar el análisis histórico reciente en la discusión acerca del orden público en Colombia que hasta la actualidad sigue un camino de deterioro evidente.

LOS PROCESOS DE PAZ EN COLOMBIA HASTA EL GOBIERNO DE BETANCUR

De los orígenes a la firma de la tregua

Podríamos hablar de violencia política desde el comienzo de la vida republicana colombiana. Sin embargo, para efectos de este análisis

14 *El Espectador*, octubre 27 de 1984, pág.1A

15 Leal, Francisco, *Estado y Política...*, pág. 169.

16 Ver la abundante "literatura guerrillera" de la época y la interesante síntesis de Arturo Alape, *La Paz, La Violencia. Testigos de Excepción*. Valencia Editores, Bogotá, 1984.

se tomará como una referencia más reciente el ascenso al poder del conservador Mariano Ospina Pérez en 1946. Este ascenso se caracterizó por la división interna que sufría el partido liberal, siendo éste quien tenía el apoyo mayoritario del electorado. Esto significó que el gobierno de Ospina tuvo que servirse de estrategias coactivas como manera de acallar el descontento de la oposición:

Los liberales empezaron el proceso para acusar políticamente al presidente Ospina Pérez en el Congreso. El a su vez declaró subversiva la conducta del Congreso y promulgó una serie de decretos el 9 de noviembre de 1949 cerrando el Congreso e implantando la censura de prensa y el Estado de Sitio. El 27 de noviembre Laureano Gómez fue elegido presidente de la República sin ninguna oposición...¹⁷.

La oleada de violencia bipartidista había llegado a su punto máximo con el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, hecho que marcó claramente el inicio de la guerra frontal partidista. El partido de oposición respondió a la represión gubernamental con la creación de guerrillas rurales, orientadas ideológicamente por el Directorio Nacional del Partido Liberal. La violencia se generalizó entonces a todo el territorio nacional.

El gobierno de Laureano Gómez, reforzó este ambiente de conflicto caracterizándose por la represión violenta como principal medio de mantener el poder.

Las incongruencias que presentaba el gobierno de Gómez sumada a la crisis económica que se desarrolló a partir de 1950, crearon descontento aún en el seno del Partido Conservador, especialmente desde los grupos Alzatistas y Ospinistas. Los directores políticos vieron la inminente necesidad de colocar un árbitro en el conflicto. Es así como, el 13 de junio de 1953, en el llamado "golpe de opinión", subió al poder el Teniente General Gustavo Rojas Pinilla. Este

decidió inmediatamente la promulgación de una ley de amnistía que comprometiera a la oposición, en este caso el Partido Liberal, a deponer su brazo armado: las guerrillas.

La violencia bipartidista había llegado a extremos inimaginables, donde los dos partidos financiaban y promovían su ejecución, para imponerse el uno sobre el otro. Pronto se planteó que las fuerzas estaban equilibradas (aunque más bien la violencia amenazó en algunas regiones con desbordar la propuesta bipartidista) y así, los dos partidos, por intermedio del militar Gustavo Rojas, se declararon mutuamente la amnistía. En ella se comprometía al partido liberal a entregar las ya potentes guerrillas del Llano¹⁸.

En esta amnistía se caracterizaba el delito político en relación a la adhesión o aversión hacia el gobierno de turno. Es decir, por delito político no se entendía lo que se entiende hoy (ataque contra el sistema) sino a la manifestación violenta de los intereses partidistas dentro del mismo sistema.

El artículo quinto de dicha amnistía reservaba a la justicia militar o civil, por medio del llamado "crimen atroz", el derecho de clasificar a quienes se perseguía y quienes deberían ser rehabilitados.

De esta manera se evidenció el primer problema de la amnistía, este es, la ambigüedad en los conceptos para la implementación de la misma. Después de este decreto, el número 1823 de 1954, se creó uno complementario, el 2062, que consideraba a la justicia militar como la única que podía decidir el favorecimiento de la amnistía. Esto coincidía con las intenciones de Rojas de crear una tercera fuerza de corte populista¹⁹ y mantenerse en una dictadura franca y abierta y no ya en una posición de mediador del conflicto entre los partidos tradicionales.

Esta medida, creó una segunda ola de violencia que se caracterizó por una guerri-

17 Oquist, Paul, **Violencia, Conflicto y Política en Colombia**. Instituto de Estudios Colombianos, Bogotá, 1978, pág. 239.

18 Molano, Alfredo. **Amnistía y Violencia**. CINEP, Bogotá, 1981, pág. 15.

19 Ver Palacios, Marco, **El Populismo en Colombia**. Ediciones el Tigre de Papel, Medellín, 1971.

lla, ya no públicamente patrocinada por el partido liberal que había recibido su cuota política, sino que se había dejado abandonada a su propia suerte. Esta guerrilla cumplía una misión importante: demostrar que Rojas Pinilla era incapaz de mejorar las estructuras de la sociedad que empezaban a ser cada vez más el eje de crítica y ataque de sectores rebeldes²⁰.

El primer presidente del Frente Nacional, que se inició en 1958, Alberto Lleras Camargo, decretó una segunda amnistía a los guerrilleros persistentes en la cual se insistía en la nueva problemática, la de la subversión: "si el país tuviera que vivir en Estado de Sitio permanente, para que los conspiradores no prosperaran y los amotinados no se tomarán el gobierno, es dudoso que pudiéramos servir a las causas de la libertad"²¹.

La amnistía decretada en 1958 (decretos 0323 y 0328) lo fue en Estado de Sitio parcial y sólo cobijaba delitos cometidos en los departamentos donde actuaba el Estado de Sitio iniciándose así una nueva regionalización del conflicto.

La amnistía se caracterizó además, por los innumerables condicionamientos para su ejecución muy orientados hacia el tema de las clases sociales y menos hacia el tema bipartidista. La rehabilitación contemplada favoreció más a los gamonales liberales que patrocinaron formalmente la violencia que al pueblo que se vio más afectado por ella. Sirvió también como un mecanismo de legitimación del gobierno a la vez que se excluían los grupos que ahora luchaban orientados por una ideología de izquierda y contra los cuales se preparaba el terreno para combatirlos abiertamente.

Paralelamente, en el seno de la organización guerrillera, se presentaron dos posiciones en torno a la aceptación de la amnistía propuesta por el Gobierno. Esto condujo a una represión abierta hacia los sectores radicales que fueron identificándose cada vez más con una guerrilla social. En 1964, el presidente Guillermo León Valencia caracterizaba el viraje definitivo del discurso estatal al afirmar que:

*La violencia actual es de clara orientación comunista... En consecuencia el Gobierno se encuentra en una lucha a muerte contra quienes están tratando de arrebatar nos la libertad, para sumir al país en el perdón y en el partido único, donde no es posible pensar, ni hablar, ni actuar*²².

Estas apreciaciones del presidente toman mayor importancia si se considera el contexto internacional en el que el período posterior a la Revolución Cubana generó un recrudecimiento del conflicto Este-Oeste y la persistencia en el bloque hegemonizado por Estados Unidos, de la cruzada anti-comunista que definió el esquema de la subversión interna el cual simplificó y relegó a un segundo plano la cuestión de las estructuras sociales como generadoras de la violencia social²³.

En esta tercera etapa, a partir de 1964, es evidente que las guerrillas que subsistieron se aliaron directamente con el comunismo y adoptaron sus técnicas de lucha, algunas influidas por el triunfo de la guerrilla en Cuba, que se constituyó en una vía aceptable para lograr los cambios en la estructura social que era el interés mayor de estos grupos rebeldes.

Basadas en las recomendaciones del Partido Comunista Colombiano (PCC) insinuadas desde los años cuarenta, las guerri-

20 No olvidar los escándalos de la "pacificación", entre los cuales fue de especial importancia el asesinato de Guadalupe Salcedo y sus lugartenientes los cuales aceleraron la ruptura entre los grupos alzados en armas y la dirigencia liberal.

21 Fajardo, Darío, *Violencia y Desarrollo*. Fondo Editorial Suramericano, Bogotá, 1978, pág. 208.

22 Este documento fue publicado por Arango, Carlos. *Farc Veinte Años de Marquetalia a la Uribe*. Ediciones Aurora, Bogotá, 1984.

23 Los famosos Plan LASO y de la Alianza para el Progreso expresaban la típica complementariedad de dicha política, una mezcla de las políticas del "gran garrote" y del "buen vecino" de épocas anteriores.



llas tomaron regiones de “auto-defensa”, es decir, se establecieron en regiones donde impusieron un sistema propio de gobierno las cuales llegaron a catalogarse en el discurso conservador de los años sesenta como “repúblicas independientes”. Algunas de estas regiones fueron Marquetalia, Guayabero y Río Chiquito. La más famosa de ellas, Marquetalia, fue tomada por el ejército en 1964 originándose un sector de la guerrilla, el más importante hasta la actualidad por lo menos en términos cuantitativos, que ha mantenido desde entonces la táctica de la “guerra de guerrillas” o de lucha en movimiento con varios frentes. Este sector es el denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que proclamó su proyecto agrario en 1966. En este proyecto se esbozaron los principios de lucha: Reforma agraria “verdadera”, es decir, la entrega gratuita de tierra a los campesinos incluidas

las herramientas y demás elementos necesarios para la producción; eliminación de las relaciones de producción atrasadas (aparcería, arrendamientos, etc.); conservación de explotaciones agrarias convenientes; crédito, suministro de semillas, asistencia técnica, educación, vivienda y comunicaciones para los campesinos; garantías de precios adecuados para las cosechas; creación de un frente amplio único, obrero-campesino que incluyera a todas las fuerzas democráticas y progresistas del país²⁴.

Por otra parte, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), surgió en 1965 como consecuencia directa de la atrofia política que sufrió el movimiento estudiantil, al no encontrar salidas políticas legales a la búsqueda de espacio público ante el ensanche policlasista de la universidad. Figura central de este movimiento fue Camilo Torres quien representaba, además, la imposibili-

24 Leal, Francisco, *Estado...*, pág. 157.

dad de acción de terceras fuerzas legales después de su experiencia como líder del Frente Unido. En alguna medida, el ejército Popular de Liberación (EPL), puede inscribirse dentro de esta misma lógica. El cuarto caso guerrillero se ubica en el Movimiento 19 de Abril, (M19) nacido de la frustración del ahogado triunfo electoral de la ANAPO en 1970 cuando las votaciones señalaban a Gustavo Rojas Pinilla como virtual presidente de la nación. El último caso se refiere al grupo Autodefensa Obrera (ADO) que surgió en la década de los 70, con un carácter más urbano. Así, para la década de los 80, se había consolidado de manera definitiva el problema guerrillero en Colombia. Se trataba de encauzar la oposición por las armas frente a un sistema que les impedía manifestarse legal y legítimamente ante las necesidades populares²⁵.

La represión no fue suficiente para aniquilarlos. En esta época, las instituciones militares del Estado iniciaron una abierta adoctrinación en el sentido más general de la Doctrina de la Seguridad Nacional²⁶, lo que trajo como consecuencia un recrudecimiento de las tácticas de guerra contra la denominada subversión interna. Este proceso es especialmente claro durante el mandato de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982) quien implementó el famoso "Estatuto de Seguridad", dando rienda suelta a la acción antisubversiva e institucionalizando un régimen de fuerza en el que los militares tenían enormes ventajas para ejercer no sólo funciones represivas sobre los sectores populares sino, también, para consolidar un proceso de politización y relativa autonomía²⁷. Esta política de Turbay contradecía el efecto de la amnistía que se promulgó du-

rante su gobierno, pues se pretendía que los guerrilleros se acogieran a ella cuando se les esperaba para ajusticiarlos. El fracaso de esta amnistía fue estruendoso debido sobre todo a su carácter de pacificación-represión.

Es así como al acceder Belisario Betancur a la presidencia en 1982 el problema guerrillero había alcanzado proporciones enormes. Su programa de gobierno se orientó, entonces, a dar una solución pacífica al conflicto armado. El 19 de noviembre de 1982 se decretó la "amnistía para la paz" correspondiente a la Ley 35 de ese año. Esta amnistía, se diferenciaba de las anteriores aquí mencionadas por varias razones: se promulgó en ausencia del Estado de sitio; el delito político ya no se entendía como la "extrema adhesión al Gobierno" (de partido) sino como la oposición rotunda al sistema, "...rebelión, sedición o asonada, y los conexos con ellos por haber sido cometidos para facilitarlos, procurarlos, consumarlos u ocultarlos"²⁸; en el artículo quinto se vislumbraba otra diferencia fundamental, "los beneficiados por esta Ley a quienes no se hubiere iniciado proceso o que se encuentren en libertad por cualquier motivo, no podrán ser llamados, requeridos ni investigados por ninguna autoridad"²⁹. En las anteriores amnistías, era requisito indispensable el haber sido procesado o estarlo siendo, para poder acogerse a la ley. Encontramos, sin embargo, dentro del contexto de la Ley, un artículo que perpetuaba la subjetividad de las anteriores amnistías, al utilizar palabras que se prestaban para interpretaciones: en el artículo 3, donde se determina quienes son las personas que no serán beneficiadas por la Ley decía: "si (los crímenes fuera de combate) fueran cometidos con sevicia, o colocan-

25 Una detallada explicación de los orígenes, significado y alcances del movimiento guerrillero se encuentra en la abundante "literatura guerrillera" que se publicó especialmente a partir de los años ochenta. Véase una bibliografía sobre el tema en Cardona, Guillermo, *Para un Estudio sobre la Violencia. Documentos Ocasionales*, No. 55, CINEP, Bogotá, 1989.

26 Leal, Francisco, *Estado...*, pág. 249.

27 Campos, Diego, et. al., "La Paz, Amnistía Tradicional o Reforma Real". *Ponencia presentada al Seminario sobre las Perspectivas de la Paz*, Colegio San Carlos, Bogotá, Octubre de 1984, pág. 18.

28 Campos, Diego, et. al., "La Paz...", pág. 23.

29 Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. *La Realidad del Si se Puede: Demagogia y Violencia*. Mimeo, Bogotá, 1985, pág. 119.

do a la víctima en situación de indefensión o inferioridad, o aprovechándose de esa situación". Esto, brindaba a la justicia encargada de amnistiar a los guerrilleros, la posibilidad de calificarlos como victimarios inmorales, lo que entre otros factores puede explicar el por qué de un estimado de 10.000 guerrilleros, sólo se acogió a la amnistía la décima parte de ellos³⁰.

A los guerrilleros beneficiados con la amnistía se les promovía con un *Plan Nacional de Rehabilitación*, radicalmente diferente a los anteriores ya que, como se estipulaba en el artículo sexto, aquel se encaminaba a la solución de los problemas de carácter social que los territorios donde se enfocaba y se detectaba la violencia, presentaban. El plan comenzó a funcionar paralelamente a la amnistía y hacía mención, fuera de las obras públicas de carácter social, a la concesión de créditos para las personas que se acogieran a la ley de "perdón y olvido".

Este plan desafortunadamente tendía a alimentar las necesidades individuales y no las colectivas además de enfrentarse con la imposibilidad económica del Estado para aliviar en el corto plazo, las necesidades y los problemas sociales sin recurrir a cambios estructurales en el sistema. Por estas y otras razones, la lucha guerrillera no se extinguió ni se vio afectada de manera importante y el gobierno de Betancur se vio obligado a dar un paso más en la consecución de la paz, esto es, la firma de una tregua con el sector guerrillero y el intento de institucionalización del mismo. Además generó la posibilidad de un "Diálogo Nacional" cuyo objetivo sería sugerir pautas de tipo reformista para ser discutidas y eventualmente aprobadas en el Congreso, como única solución al conflicto generado en las estructuras mismas de la sociedad.

La firma de la tregua y la evolución del proceso a partir de ella

El acercamiento entre el gobierno y la guerrilla se había dado en diferentes etapas, cuya iniciativa se la atribuían diferentes actores. Jaime Bateman, líder del M19, había declarado en representación de este grupo que:

La paz no era bandera en la campaña de Betancur. La tenía mejor elaborada López, pero Betancur cuando llegó al gobierno, sorpresivamente lanzó su propuesta de paz... Cuando Betancur estaba pronunciando su discurso de posesión a mi me estaban haciendo una entrevista aquí en el Caquetá. Y nosotros dijimos: "Estamos listos a conversar donde sea. Estamos pendientes"³¹.

El mismo grupo había propuesto el 20 de julio de 1981, que para lograr la paz era necesario "el levantamiento del estado de sitio y por consiguiente la derogación del estatuto de seguridad; amnistía general e incondicional; diálogo nacional"³². Estas eran las tres propuestas que hacía entonces el M-19. Decían los líderes de este grupo que Betancur respondió entonces, con la famosa multipartidaria con el partido conservador, con el partido liberal, con el partido comunista y hasta con el M-19. Sin embargo, las propuestas que hizo la multipartidaria estaban por encima de las posibilidades del mismo Presidente³³.

Aunque en 1983, se establecieron conversaciones directas entre el Presidente, en viaje por España, y representantes del M-19, la última parte del acercamiento se adelantó a través de una Comisión de Paz especialmente designada por la Presidencia y la cual finalmente se comprometió en la firma de los acuerdos de cese al fuego. Según Bateman: "Belisario lo que hizo fue echarle la

30 Bateman, Jaime. *Oiga Hermano*. Ediciones Macondo, Bogotá, 1984, pág. 41.

31 *Ibid.*, pág. 46.

32 *Ibid.*, pág. 47

33 *cfr. Bateman...*

palangana a la Comisión de Paz sin comprometerse él mismo”³⁴.

Este tipo de acercamientos con los distintos grupos dio como resultado que el primero de los acuerdos fuera firmado el día 28 de mayo de 1984 entre la Comisión de Paz y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo. Este pacto fue seguido por otros que comprometían al Ejército Popular de Liberación, al Movimiento 19 de Abril y a un sector de Autodefensa Obrera. Este paquete de acuerdos acabó de firmarse en el mes de agosto de 1984.

El acuerdo firmado con las Farc-EP, fue representativo de este proceso por lo que se referirán algunos de sus apartes:

En el numeral 8 se estipulaba que:

La Comisión de Paz da fe que el Gobierno tiene una amplia voluntad de: a) Promover la modernización de las instituciones políticas... b) Impulsar vigorosamente la aplicación de una política de Reforma Agraria...c) Robustecer y facilitar la organización comunal...d) Hacer esfuerzos para el incremento de la educación...e) Mantener su propósito indeclinable de que se defenderán los derechos humanos de los ciudadanos como lo consagra la Constitución... f) Promover, una vez reestablecida la paz, y tal como ocurrió en otras oportunidades, iniciativas para fortalecer las mejores condiciones de la fraternidad democrática, que requiere perdón y olvido...³⁵.

También se destacaba en este acuerdo el hecho de que algunos apartes podían ser sujetos a amplias interpretaciones de acuerdo a las exigencias de la coyuntura. El ejemplo más claro lo constituía el artículo 3 que decía: “la orden del Señor Presidente (cese al fuego) se cumplirá únicamente respecto de los grupos y personas que acaten y respeten las bases del acuerdo y no infrinjan la ley penal”. En este artículo se contemplaría, por ejemplo, la

prohibición de porte de armas y uniformes militares si se tiene en cuenta el término “ley penal”, pero como se entiende, el manejo de estas minucias legales dependía más bien de las condiciones políticas del proceso. Se evidenció, entonces, el carácter no necesariamente legal de los textos de los acuerdos los cuales estaban obviamente sujetos a una “libre” interpretación. Esta es una de las razones que llevó a analistas, como Fernando Cepeda, a afirmar que “un análisis puramente formal, jurídico, de los acuerdos está condenado al fracaso ya que su carácter es puramente político”³⁶.

La principal expectativa de los acuerdos fue el denominado Diálogo Nacional, foro generador de las propuestas de reforma social que deberían ser implementadas por el Congreso, principalmente. Sin embargo, el famoso diálogo vivió el retiro de importantes sectores, desde la guerrilla hasta el grupo oficial, además de haberse minimizado en los medios de comunicación masiva, sin que se hubiera logrado, por otra parte, una adecuada eficiencia operativa.

El debate electoral para la sucesión de Betancur rápidamente ganó importancia frente a la opinión pública, y el tema de la paz sufrió una repentina relegación a pesar de la proporción del fracaso del diálogo, sin que nadie pareciera reaccionar. El Diálogo Nacional pasó a un segundo plano en la discusión pública.

Aunque el ministro de gobierno, Jaime Castro, seguía afirmando en noticieros de televisión que el Diálogo Nacional no había muerto, la realidad era otra y el gran plan y la convocatoria de las comisiones del Diálogo Nacional se complicaron cada vez más empezando por los desacuerdos en los planes y metodologías de trabajo, siguiendo con un creciente ausentismo y una cada vez mayor subestimación de su importancia por

34 Documento del Acuerdo de Cese al Fuego firmado en la Uribe.

35 *El Espectador*, 19 de marzo de 1985, pág. 1A.

36 Conferencia dictada en la Universidad de los Andes, Bogotá, Enero, 1995.

parte de los partidos políticos que, para "ese tipo de discusiones tienen al Congreso"³⁷.

Al tiempo, existía un sector del movimiento guerrillero que no participó en los acuerdos de cese al fuego. El principal de estos grupos fue el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el cual continuó su acción armada junto con los grupos disidentes de las Farc, como el Ricardo Franco, y con el nuevo grupo guerrillero que surgía a partir de las luchas indígenas del Cauca, el Quintín Lame. Estos grupos constituyeron además un creciente núcleo armado de oposición al proceso, especialmente fortalecido por un proceso de unidad que se evidenciaba en las declaraciones del comando mayor del Ricardo Franco en el sentido de estar actuando en unión del ELN y buscando el mismo objetivo con el Quintín Lame³⁸. No es del todo claro cual era el peso militar de estos grupos desde un punto de vista cuantitativo pues constituían, en todo caso, una minoría del movimiento guerrillero colombiano, especialmente frente al grupo más numeroso, las Farc. Pero sus acciones fueron publicitariamente muy importantes, a pesar de que los grupos guerrilleros más tradicionales, especialmente las Farc, les declararon una especie de guerra interna para acabar con este grupo disidente o enemigo, como ellos mismos lo catalogaron, y cuyos efectos y secuelas todavía persisten en los años noventa como luchas territoriales de exterminio entre sectores del movimiento guerrillero.

Sin embargo, la acción de estos grupos rebeldes renuentes a los acuerdos fue un elemento de importancia pues permitió a los sectores no guerrilleros que se oponían al proceso, referirse continuamente a las "viola-

ciones al tratado de cese al fuego", especialmente y como era de esperarse desde la propaganda de los sectores militares³⁹, y referirse al "fortalecimiento que se da dentro de la guerrilla escudándose en los pactos de paz" como fue denunciado por un foro de propietarios del Magdalena Medio⁴⁰; y hasta hacer declaraciones como las de monseñor Ramón Mantilla Duarte, quien promulgaba que, "la Guerrilla firma la paz con una mano y con la otra comete crímenes"⁴¹.

Entre los sectores más opuestos al proceso de paz es necesario mencionar a los grupos paramilitares que se empezaron a crear para impartir "justicia privada" ante el presunto abandono por parte del Estado de la protección que este debería dar a la honra y bienes de los ciudadanos y que según algunos sectores de la sociedad, seguían siendo amenazados por los guerrilleros como si nada hubiera pasado. Grupos como el MAS, los Tiznados, los Grillos, etc., tristemente célebres durante el período subsiguiente de la "guerra sucia", fueron fuerzas muy importantes como presión desestabilizadora del proceso de paz.

En relación a las fuerzas de oposición a la Apertura Democrática apareció como interesante y determinante la posición del Gobierno. El propio Presidente denunció una conspiración para realizar un Golpe de Estado⁴² la cual coincidía con la creciente actitud de rechazo de algunos sectores hacia las políticas de paz del Gobierno. Se destacaban las posiciones de la Asociación de Militares Retirados, que publicó en los principales periódicos una carta de abierta oposición al proceso⁴³; la declaración del Episcopado Colombiano en contra del proyecto de indulto⁴⁴; y sobre todo, la actitud de creciente

37 El Espectador, 15 de mayo de 1985, pág.8D.

38 El Tiempo, Octubre 18 de 1984, pág.1A.

39 El Espectador, Septiembre 20 de 1984, pág. 7A.

40 El Tiempo, Septiembre 24 de 1984, pág. 7A.

41 Revista Semana, Primera Semana de Octubre de 1984, pág. 24.

42 El Espectador, 23 de Septiembre de 1984, pág. 8A.

43 El Espectador, Octubre 2 de 1984, pág. 1A.

44 El Espectador, 16 de Octubre, pág. 9, Sección Bogotá; 22 de Septiembre de 1984, pág. 9A.

crítica que asumieron los principales gremios económicos como la Andi, Fenalco, Fedegan, SAC, Camacol, Acodi, SAG, etc., los cuales se pronunciaron continuamente expresando su preocupación por la situación de orden público⁴⁵.

La declaración de Betancur, a pesar del gran riesgo político que implicó produjo una reacción de algunos de los grupos opositores en el sentido de apoyar nuevamente al Gobierno, así fuera levemente o, por lo menos a disminuir las diatribas contra el proceso del Diálogo Nacional.

Se destacó entonces una cascada de titulares de prensa del siguiente tenor: "No soy conspirador": Echeverri Correa (Andi)⁴⁶, "No soy anfitrión de conspiradores": Villegas (senador conservador)⁴⁷ y así sucesivamente; al mismo tiempo que el gobierno declaraba estar estudiando medidas ofensivas contra los ejércitos particulares⁴⁸.

No significó esto que la oposición al Gobierno en sus políticas de paz desapareciera, pero por lo menos se ejerció algún control momentáneo sobre la misma.

También es notable la posición del Gobierno frente a la actitud adoptada por algunos grupos en tregua. El EPL después del acuerdo de cese al fuego, hizo exigencias de desmilitarización en zonas de actividad guerrillera bajo la amenaza de retornar a la lucha armada⁴⁹; sin embargo, el ministro de Gobierno, Jaime Castro, fijó una posición firme y clara ante la amenaza, aludiendo a la voluntad del Gobierno de concertar la paz dentro de una conversación estricta de las reglas del Estado de Derecho, lo que implicaría el ejercicio de la fuerza militar cuando se considerara necesario para mantener el orden público⁵⁰. Esta declaración, aunque

constituyó un nuevo riesgo, produjo un efecto de control sobre este grupo cuya posición afectaba la buena marcha del proceso.

En este ambiente de "tira y afloje", dos días después de la firma de la tregua con los últimos grupos concertantes de la misma, el Presidente declaró que,

ni se nos han hecho ni aceptaríamos propuestas al margen de la ley; en los pactos de paz que el Gobierno ha firmado, no se entrega nada que sea accidental o esencial en la naturaleza de nuestro Estado; dichos pactos son expresión de la fortaleza reflexiva, no de la debilidad del Gobierno; mantenemos la mano tendida a la reconciliación pero también la mano vigilante en la defensa de la seguridad de la gente, si persisten en la violencia o el secuestro o el delito en cualquier forma, grupos o individuos recalcitrantes... Vamos a dar un espacio a la actividad política, a partir de las evidentes garantías que hoy tenemos⁵¹.

Esto, además de insistir en que la iniciativa del proceso provenía principalmente del Presidente y la Guerrilla, confirma lo ya expuesto en este trabajo en cuanto a las intenciones de incentivar un proceso real de pacificación a través de una mayor politización de la sociedad, manteniendo una posición clara y firme en relación a la defensa del Estado de Derecho al cual se debían integrar las fuerzas de oposición armada.

En el caso de los partidos políticos tradicionales, se evidenció un aislamiento importante del proceso por parte de los mismos. Excepto las reuniones efectuadas durante el mes de octubre de 1984 entre las directivas del liberalismo y el conservatismo con el M19⁵², que no condujeron a declaraciones importantes, y el nombramiento del

45 El Espectador, Octubre 6 de 1984, pág. 1A.

46 El Tiempo, Octubre 4 de 1984, pág. 10B.

47 El Espectador, Octubre 13 de 1984, pág. 1A.

48 El Espectador, 18 de Septiembre de 1984, pág. 1A.

49 Ibid., pág. 1A.

50 Estas declaraciones fueron las primeras después de la tregua, dos días después de concertada la misma. Se publicaron en todos los diarios del país.

51 El Espectador, 27 de Septiembre de 1984, pág. 11B.

Declaración del Partido Comunista Colombiano

Unir fuerzas por la paz democrática

Los artistas llenan las plazas de Colombia para testimoniar, dibujando la paloma de la paz, su anhelo de cambios que permitan la edificación de un porvenir democrático.

Al mismo tiempo, se ha reunido el gran Foro nacional por las reformas políticas, sociales y la paz, que ha congregado las más amplias corrientes de la opinión progresista en la misma la urgencia de una profunda renovación democrática de la sociedad colombiana.

Este proceso fue abierto con la histórica firma de los acuerdos de tregua de La Uribe, pactado entre las Farc y el gobierno. Proceso que hoy se consolida cuando el M-19 y el EPL avanzan en la misma dirección.

Esta confluencia de acciones exige medidas concretas que según entiende el Partido Comunista son:

El levantamiento del estado de sitio.

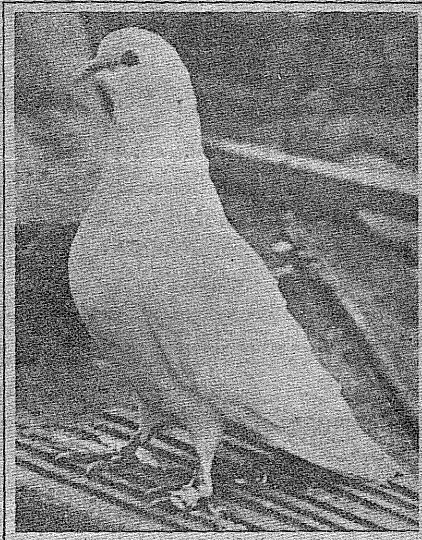
La desmilitarización de las zonas agrarias y de la vida nacional.

La liquidación de las bandas paramilitares y castigo por las desapariciones de dirigentes populares.

Una audaz reforma política que remueva los obstáculos reaccionarios del bipartidismo, garantizando las libertades y abriendo posibilidades a las nuevas fuerzas en el escenario nacional.

Una reforma social que incluya los aspectos laborales, agrarios y urbanos y educacionales.

El Partido Comunista, campeón de la lucha por la apertura democrática, saluda a los artistas, a los sectores democráticos y progresistas, a los luchadores del movimiento popular en sus diversas formas y los exhorta a que prosigamos unificadamente la labor de construcción de un gran frente democrático que cambie la faz política del país.



PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO
Bogotá, agosto 26 de 1984

director del Instituto de Estudios Liberales, Hernando Gómez, como vocero oficial del partido para el Diálogo Nacional, las direcciones de los partidos se concentraron en el manejo aislado de la crisis política, más preocupados por las estrategias electorales para las elecciones de 1986. Su papel como

participes del proceso solamente puede referirse a su representación en el Congreso, cuya actuación se referirá a continuación.

Ya el Gobierno había establecido que el Diálogo Nacional no sería instancia decisoria ni que intentaría en ningún momento

reemplazar la función legislativa del Congreso⁵³. Esto coincidió con las declaraciones de las directivas del órgano legislativo en el sentido de no participar en el Diálogo Nacional⁵⁴. Así, se estableció de una vez por todas que si bien la actividad parlamentaria era el elemento indispensable para institucionalizar las propuestas emanadas del Gran Diálogo, su actividad era independiente del mismo, lo que de otra manera significaba que el éxito o el fracaso del reformismo sugerido estaba en manos del Congreso y en su manera de responder a las presiones de la sociedad civil, incluidas las del Diálogo Nacional.

Desafortunadamente el análisis de la actividad parlamentaria deja mucho que desear. La iniciativa más importante que se aprobó como ley, otorgaba al presidente la facultad de conceder el beneficio del indulto a los subversivos que se encontraban incurso en los delitos de sedición, rebelión y asonada y en otros diferentes a los que se les había dado el carácter de conexidad. Sin embargo, la mayoría de los supuestos de reforma social que esperaban ser estudiados y aprobados por el Congreso, quedaron por fuera de las sesiones ordinarias y extraordinarias del parlamento.

El ejecutivo, contradictoriamente con sus propias propuestas y haciendo eco al Congreso empezó a considerar que la aprobación del indulto era una medida suficiente y en ese sentido se dieron declaraciones de Jaime Castro y del ministro de defensa, Miguel Vega Uribe, diciendo que el indulto era la última concesión del gobierno y del Congreso a la guerrilla. Se desvirtuó, entonces todo el carácter y contenido de la apertura democrática, que si bien exigía el paso inicial del indulto, esperaba profundizar en la consecución de las reformas sociales ade-

cuadas para superar la crisis orgánica que afectaba al sistema.

Los sectores militares, como era de esperar, asumieron una actitud de prevención y desconfianza crecientes frente a la apertura. La formación ideológica que venían recibiendo dentro del esquema de la Doctrina de la Seguridad Nacional explica, en parte esta actitud. El proceso de autonomía y politización que venían experimentando los militares en Colombia, les permitió ya en los ochenta ser un grupo importante frente al proceso político. Además, el papel activo que jugaban en el conflicto violento, en los campos especialmente, los llevó lo mismo que a la guerrilla a una continuada ruptura de la tregua pactada. El efecto anticomunista buscado por los militares simplificaba su percepción del conflicto social y los convirtió en uno de los factores negativos más importantes en aquella coyuntura. Generalizaciones acerca del grupo militar tuvieron, por supuesto, sus excepciones. Tal es el caso del general(r) Matallana quien asistió a la reunión que funcionarios del gobierno tuvieron con los altos mandos de las Farc en la zona montañosa de La Uribe y apoyó de manera más o menos clara el proceso de paz⁵⁵. En todo caso, la actitud más común entre los militares fue la del ataque al proceso, recrudecida esta en proporción a los ataques que se empezaron a renovar contra las fuerzas militares, de parte del sector guerrillero disidente: helicópteros derribados, buses militares atacados en las zonas urbanas, ataque a cuarteles, etc.⁵⁶.

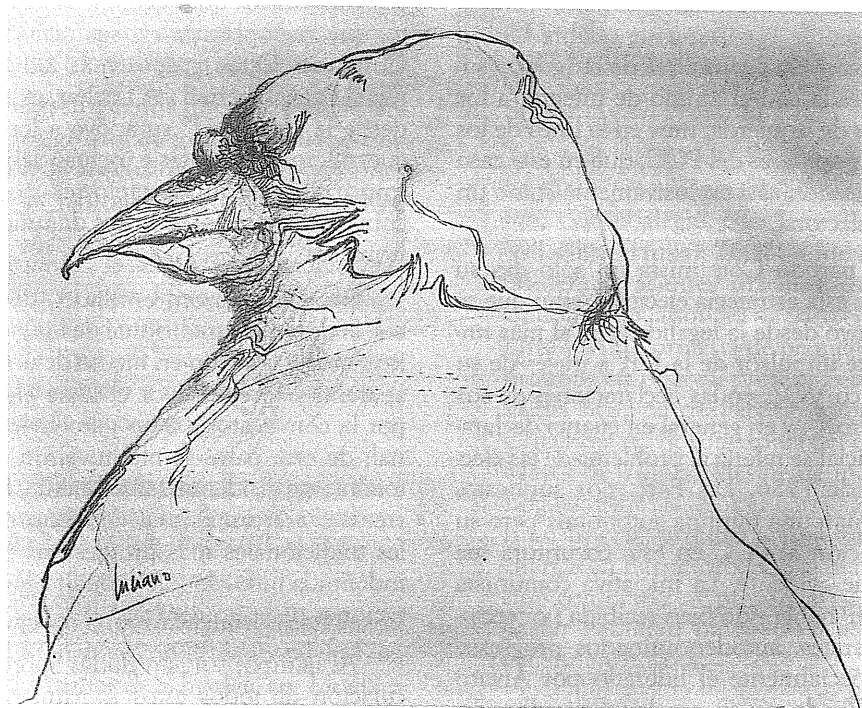
Por supuesto, aquí no se incluyen las posiciones de todos los grupos involucrados en el proceso político, y ni siquiera los mencionados son analizados en todas sus proyecciones, pero veremos a continuación un poco más acerca de las posiciones de la llamada izquierda colombiana, con el fin de

53 *El Tiempo*, 1 de Octubre de 1984, pág. 1A.

54 *El Espectador*, 2 de Octubre de 1984, pág. 6A.

55 *El Espectador*, 7 de Abril de 1985, pág. 5A.

56 *El Espectador*, 11 de Mayo de 1985, pág. 1A: Asalto a Cuarteles en Suba; *El Espectador*, 15 de mayo de 1985, pág. 10A: Ataque del ELN a la Cárcel Modelo; *El Espectador*, 16 de Mayo de 1985, pág. 1A: Derribando Helicópteros del Ejército en Cauca; y muchas otras acciones del estilo...



Luciano Jaramillo. "Paloma" (1970)

obtener una mayor proyección en el tratamiento del problema.

La Izquierda frente al proceso

Hablar de "izquierda en Colombia" en aquella época nos remite a una dificultad semántica. Con este término se designó a una gran cantidad de ideologías, partidos, movimientos sociales, que tenían en común una actitud de cambio, antagónica o revolucionaria frente al sistema tradicional⁵⁷.

En el proceso político de los ochenta, se identificaban por lo menos tres importantes sectores de la denominada izquierda: el guerrillero, el de los partidos políticos y el de

algunos grupos comunitarios de base incluidas las organizaciones sindicales.

En relación al primero, este se encontraba dividido en dos grandes grupos: los que aceptaron y los que no, los acuerdos de paz. En esta parte se hará mención a un aspecto de la acción de estos actores que resulta ilustradora: la vinculación de estos grupos con los partidos políticos en su camino hacia la legalidad. Así, no se hará demasiado énfasis en sus posiciones independientemente de estos ámbitos institucionales lo cual comprendería un análisis más extenso que en todo caso ya se ha realizado por parte de notables investigadores⁵⁸.

En el caso de las Farc, es indudable su tradicional relación con el Partido Comu-

57 Gaona, Manuel, *Bases para un estudio sobre la oposición en Colombia.*, Universidad Externado de Colombia. Bogotá, Diciembre de 1982.

58 García, Mauricio, *De la Uribe a Tlaxcala: Procesos de Paz.* CINEP, Bogotá, 1992.

nista Colombiano. Esta agrupación, fue la fundadora de la tristemente célebre Unión Patriótica, UP, de los años de la "guerra sucia", creada con el ánimo de integrar a los sectores de izquierda, muy en la línea de los frentes populares del PCC, que en este caso se expresaron casi exclusivamente como un frente electoral.

El partido Comunista no sólo dio su apoyo a esta estrategia electoral, sino que se constituyó desde la legalidad, en el más importante impulsor de la UP, a través de su periódico VOZ, en las declaraciones de sus miembros⁵⁹, y en general en cuanta declaración oficial se refería al problema de las elecciones de 1986. Las Farc, por supuesto, mantenían una mínima autonomía pero su vinculación al PCC en esta coyuntura fue más que evidente. La iniciativa comunista de la UP había sido bien recibida por sectores liberales, autodenominados progresistas, especialmente el liderado por Álvaro Uribe Rueda, quien proclamó su adhesión a la UP, de manera informal⁶⁰, aunque también hubo intentos de vinculación a la propuesta de un frente amplio de parte de Ernesto Samper, quien participó en el acto de lanzamiento de la UP, y de Luis Carlos Galán, quien declaró que su movimiento debería tender hacia la izquierda⁶¹, aunque más en el sentido de volver progresista su partido y no tanto para crear una coalición con los sectores más radicales incluidos los de la guerrilla.

A su vez, el EPL, aunque asistió a las reuniones convocadas por todos los gestores de la unión de la izquierda, especialmente el grupo Firmes y el PCC, mantuvo serios desacuerdos frente a las propuestas electorales y adelantó una campaña independiente, a través de su brazo legal, el Partido Comunista-Marxista Leninista, para proponer la

convocatoria de una Asamblea Constituyente, que reemplazaría en sus actividades al Congreso. Otros grupos más radicales como el Pan y Libertad y A Luchar, expresaron desde la "legalidad" su apoyo a los grupos guerrilleros disidentes e incluso sabotearon importantes concentraciones populares convocadas por los sectores de unión de la izquierda⁶².

Se evidenciaron, entonces, dos aspectos: la desunión tradicional de los grupos de izquierda, clara aún en medio de una unión aparente expresada por el tema electoral y por la convocatoria a un paro cívico nacional; de otra parte se mantuvieron sectores totalmente disidentes y finalmente, fue recurrente el acercamiento de los sectores liberales tradicionales más progresistas con una indefinida intención de cooptar a las organizaciones de la izquierda.

Al tiempo, surgían dudas sobre la articulación de todos estos movimientos que pretendían representar a las clases subalternas y la actitud de estas clases frente al liderazgo político que intentaron asumir estos grupos de izquierda. Lo que se evidenció en esa coyuntura, y lo que parece irse profundizando hasta la actualidad, es una creciente desarticulación entre ambos sectores. Si bien es cierto que los grupos políticos organizados, vincularon sus acciones con muchos movimientos populares de base, esto no dejó de tener un cierto aire de oportunismo. Si observamos, las protestas sociales que se produjeron en aquellos años en Colombia, vemos una gran expresión de conflicto, pero también vemos cómo muchos de esos movimientos fueron liderados por organizaciones de base autónomas, casi nunca vinculadas o dirigidas por los llamados grupos de izquierda. Un alto grado de intereses locales sin mayor vinculación con proyectos

59 Concretamente en el foro convocado por la Universidad Central en 1985 en el cual José Arizola del Partido Comunista se pronunció en ese sentido.

60 Este liberal, además, declaraba continuamente su carácter revolucionario y progresista: *El Tiempo*, 22 de Abril de 1985, pág. 18D; *El Espectador*, Febrero 5 de 1985, pág. 5A.

61 *El Espectador*, 23 de Febrero de 1985, pág. 5A.

62 *Voz*, Marzo 21 de 1985, pág. 22.

políticos macro y procesos de rebelión espontánea fueron los denominadores comunes de estos movimientos sociales.

Es más, surgió una diferencia interesante entre los grupos de izquierda que se centraban en la discusión, desde posiciones ideológicas radicales, alrededor del debate electoral, y los sectores populares que iban mientras tanto a la acción. Otra evidencia de esta desarticulación fueron los porcentajes de votación que resultaron bajos para los partidos de izquierda⁶³ lo mismo que el apoyo popular directo a las manifestaciones y propuestas de dichos grupos⁶⁴.

CONFLICTOS SOCIALES DETECTADOS EN LOS MESES DE FEBRERO A MAYO DE 1985

1. Sector obrero-artesanal

Huelga en Hipilandia; huelga en Panadería La Criollita; conflicto laboral en Banco de Santander; huelga en Muebles Hermes (La Ceja); protestas organizadas en Croydon; toma de instalaciones en Hulleras La Ramada; protestas obreras del 1º de mayo; paro de buses en Bogotá; toma de catedral de Neiva (obreros sindicalistas); toma de palacio arzobispal de Tunja (Caja Popular Cooperativa).

2. Sector campesino-indígena

Toma del Concejo de Barranca; toma del Incora en Cali; movimiento campesino en El Bagre; toma campesina de San José del Guaviare.

3. Sector estudiantes

Paro en la Universidad de Tunja.

4. Sector gobierno

Paro de empleados de la Universidad Pedagógica; paro de empleados estatales; conflicto laboral en el acueducto de Bogotá; marcha de protesta de empleados del Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria; protestas en Alcalis

de Colombia; protestas en Puertos de Colombia; protestas en Ecopetrol; paro en Ferrocarriles Nacionales.

5. Sector cívico-regional

Toma de tierras en: Soacha, Silvania, La Mesa (Cundinamarca); Baraya, Pitalito, Campoalegre, San José de Isnos, Villavieja, (Huila); Zulia (Norte de Santander); invasiones urbanas en Bosa, Cajicá, Suba; anuncio de paro cívico en Urrá y Mitu; protesta de pequeños propietarios en Bogotá; protestas en defensa del hospital de Pereira; toma de la Cruz Roja en Bogotá; toma del Colegio Mayor de Yumbo; desfile de motos en Bogotá; protestas por el barrio Bochica II en Bogotá; protesta contra tarifas de energía en Barrancabermeja; manifestación contra recorte presupuestal en Bienestar Familiar; bloqueo en autopista del sur en Bogotá.

Sub-totales detectados

| | |
|------------------------------|----|
| 1. Sector obrero-artesanal | 10 |
| 2. Sector campesino-indígena | 4 |
| 3. Sector estudiantes | 1 |
| 4. Sector gobierno | 8 |
| 5. Sector cívico-regional | 23 |
| Total | 46 |

(Fuentes periodísticas: **El Espectador, El Tiempo, Voz, Revolución, Tribuna Roja, Frente Socialista**)

Vemos en esta pequeña muestra, que la profundización de la crisis del sistema se expresó entre otras cosas por una amplia gama de reacciones populares. El debate por la unión de la izquierda, ampliada a sectores liberales, pudo haberse definido en ese momento en torno al eventual liderazgo alrededor de estos brotes de descontento, pero las propuestas partidistas se concentraron en las opciones electorales incluyendo el tema de la desmovilización del movimiento gue-

63 Santana, Pedro, *Los Movimientos Sociales en Colombia*. Bogotá, Foro por Colombia, 1989.

64 Esta selección resulta incompleta pero da una idea de la calidad y cantidad de los conflictos sociales en Colombia en 1985.

rrillero reducido a su eventual participación como masa electoral.

Encontrar el verdadero punto de articulación entre las diversas tendencias de oposición y materializarlo en una vinculación con los grupos de base fue una tarea inconclusa de la izquierda en ese período. La riqueza de opciones planteadas en el acercamiento entre el Estado y la oposición más radical, el movimiento guerrillero, no fueron suficientemente exploradas por los grupos legales de izquierda y su desvinculación de los movimientos sociales a cambio de la atención prestada al tema electoral hizo de esa época un verdadero fracaso en términos de la renovación de las formas de hacer política, que perduran hasta la actualidad.

CONCLUSIONES

Más de una vez se ha insistido en que la violencia, las violencias, en Colombia están ligadas a las estructuras culturales, políticas y socio-económicas del sistema y su solución se encuentra en los propios cambios a nivel de dichas estructuras.

En los años ochenta se evidenció el carácter orgánico de la crisis de la sociedad colombiana y una de sus principales consecuencias fue el intento creciente de politización, el cual se adelantó especialmente por iniciativa del gobierno del presidente Belisario Betancur.

Aunque el acercamiento entre la guerrilla y el gobierno constituyó un indiscutible avance ante la posibilidad de alcanzar cambios efectivos en el país, este proceso, llamado "de paz", presentó una gran complejidad y un eventual fracaso, que se explica en parte al considerar las diferentes posiciones asumidas por sectores representativos de la sociedad.

Como expresión de la crisis, el llamado Diálogo Nacional, un espacio paralelo a la institución legislativa y de gran aceptación en el momento, evidenció la falta de legitimidad del Congreso como órgano re-

presentativo de los intereses nacionales. Sin embargo, y quizás por ello, este actor institucional, apoyado por los militares, las altas jerarquías de la Iglesia, y los gremios, principalmente, fue definitivo en el estancamiento del proceso, dado que el organismo parlamentario era el encargado de institucionalizar las reformas necesarias sugeridas desde el diálogo nacional y demostró en cambio una falta evidente de voluntad política para el cambio de las estructuras sociales. Dado el carácter de la crisis, el reformismo se presentaba como una necesidad no solamente de los sectores populares, en busca de mejores condiciones de vida, sino también de los grupos dominantes, en su interés por mantener un control legal de la sociedad.

Una eventual unidad de los sectores populares para ejercer presión en pro de las reformas, o por lo menos una unidad de los grupos que pretendían representar a dichos sectores, se presentó cada vez más improbable dada la dificultad, tradicional además, de superar las diferencias ideológicas que se presentan entre estos grupos.

Si la necesidad de los grupos dominantes de mantener el control social hubiera podido materializarse, en las condiciones de crisis de esos años, dentro del marco del Estado de Derecho colombiano, se hubiera logrado una adecuada politización de la sociedad; pero lo que efectivamente se evidenció fue una limitada capacidad de los grupos dominantes para crear un consenso, y por lo tanto una limitación de la capacidad coactiva, mientras la coyuntura continuó empeorando.

Así, la poca viabilidad del proceso de paz de Betancur fue determinante para el futuro del país que a partir de los ochenta y hasta la actualidad siguió debatiéndose entre los intentos de una Apertura Democrática y el espectro amargo de muchas guerras civiles coincidentes y generalizadas (guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico, guerras sucias, etc.) pasando por las, hasta ahora po-

tenciales, imposturas de un gobierno autoritario (civil o militar).

De todas las opciones, la que más claramente ha interpretado la herencia de dicho fracaso parece ser el mantenimiento solapado, por discursos tecnocráticos o po-

pulistas, de las estructuras generadoras de injusticia, desigualdad y violencia. En consecuencia, el mantenimiento de la misma crisis estructural y su correlato que es la despolitización real de la sociedad colombiana.

